

# BRASIL, satélite y gendarme

Carlos Núñez

Una parte de este análisis ha sido realizado a mediados de 1967, tras la revelación del memorándum secreto en que la Escuela Superior de Guerra brasileña trazara su estrategia como «satélite privilegiado» del imperialismo (publicado en el número 10 de *Pensamiento Crítico*). Por si aún quedara alguna duda sobre la autenticidad de ese documento —que de ilusos, y de «observadores» interesados, está el mundo lleno—, basta para disiparlas la coincidencia literal, que, a nueve meses de su revelación, puede rastreadarse entre él y los poderes extraordinarios atribuidos ahora por el régimen brasileño al Consejo de Seguridad Nacional. En base a este y otros hechos convergentes, el análisis ha sido actualizado especialmente para *Pensamiento Crítico*.

No hubo descanso para Humberto Castelo Branco durante las horas previas al 15 de marzo de 1967. Casi hasta el mismo momento de ascender las rampas del Palacio Planalto hacia los fríos y despojados espacios donde habría de dar posesión del mando a su sucesor Costa e Silva, el mariscal-presidente se dedicó a firmar decenas de decretos; y esas disposiciones no se limitaban al reparto de embajadas y puestos públicos entre cuñados, sobrinos y paniaguados que suele preceder a todo cambio de administración. Al eximir de impuestos a las empresas internacionales que lo pagan en su país de origen o al decretar la restructuración de la Universidad Federal de Río de Janeiro de acuerdo a la «reforma universitaria» propiciada por su régimen y la USAID, Castelo in-

tentaba ajustar algunos tornillos más del aparato estratégico montado por la Escuela Superior de Guerra y el Pentágono para guiar la acción del régimen militar brasileño.

Esa estrategia sirve a un amor fácilmente identificable. Cuarenta y ocho horas antes de «resignar la guardia», entre decreto y decreto, el propio Castelo Branco se hizo tiempo para explicarlo a las nuevas promociones castrenses, en una conferencia de apertura de cursos en la misma ESG, donde se refirió al tema «Seguridad y desarrollo». *«La opción que realmente se nos presenta —adujo el mariscal— es entre un concepto de seguridad eminentemente nacional, lo que sería algo irreal en el mundo moderno, y esquemas de defensa asociativa, en que pasamos a pensar en términos de seguridad continental».* De hecho, la frase no hacía sino glosar una mucho más directa y expresiva de Lincoln Gordon, pronunciada en los mismos salones de la Sorbonne<sup>1</sup> militar brasileña poco después del golpe militar que derrocó a Goulart: *«No creo que un país pueda vivir y actuar en una independencia completa».*

La revelación detallada de esa «de-

<sup>1</sup> Nombre que recibe la Escuela Superior de Guerra en alusión a la misión militar francesa que la organizó después de la primera guerra mundial (N. de R.)

*fensa asociativa»* (eufemismo sustituible por un término más crudo y realista: satelización) consta en el documento confidencial de la ESG publicado en el número 10 de *Pensamiento Crítico* —documentos: *Orientación general del planeamiento de la seguridad nacional*—: ese memorándum presta valor confirmatorio a las palabras con que Castelo abrió la conferencia del 13 de marzo, asegurando a los discípulos de la Sorbonne que el tema «Seguridad y desarrollo» era *«asunto dominante en vuestro programa, doctrinario en vuestros estudios y hoy ya integrado, en su esencia, a la nueva constitución brasileña y a las leyes modernas».* Una primera aproximación en el análisis de ese documento conduce a comprobar la falacia que sustenta cierta supuesta «diferencia» entre Castelo y su sucesor en la dinastía gorila iniciada tres años atrás. En los hechos, esta presunta «diferencia» —que ha llegado a despistar a algunos honestos y habitualmente lúcidos observadores— es apenas un movimiento más en el viejo calidoscopio político manejado por el imperio.

## EL PRECIO DE LA SATELIZACION

La propaganda de origen o inspiración norteamericana ha venido insistiendo sobre una supuesta libe-

realización del régimen brasileño a partir de la asunción de Costa e Silva; el objetivo de esa promoción resulta claro: tras haber ocupado el país, Estados Unidos necesita ahora reducir las tensiones internas para consolidar definitivamente sus conquistas. Simultáneamente, desde el punto de vista político, Washington ha debido procurar solución a una disyuntiva sólo en apariencia difícil: lograr una imagen «institucionalizada» del gobierno surgido del *putch* del 64, para aplacar la mala conciencia interna sobre su desembozado apoyo a ese cuartelazo y para facilitar la movilidad diplomática de su satélite, sin hipotecar las ventajas que le ofrecen los regímenes militares, cuya generalización preconiza (Malgré la reciente defenestración de su promotor), la llamada «doctrina MacNamara». Así, desechando a sus más extremistas servidores civiles (como el inefable Carlos Lacerda, cuyo oportunismo e inestabilidad temperamental podrían resultar incómodos para el sólido pragmatismo del *State Department*), prefiriendo apostar a la rigidez organizativa de los militares, el imperio promueve una liberalización periférica, aparente, que —lejos de afectar— conserva sustancialmente la política que le abrió las puertas del dominio sobre Brasil.

216

En este contexto, la prisa de Castelo Branco por concretar disposiciones de sensible importancia hasta el minuto antes de abandonar la presidencia no debe ser entendida como una zancadilla personal contra su sucesor, sino como la complementación de una estructura adecuada para operar, sin mengua del sistema, esa aparente liberalización.

De la misma manera, algunas concesiones del régimen en el campo económico (como la fijación de un tope para los créditos que los bancos brasileños pueden otorgar a las empresas extranjeras) van dirigidas a contemplar parcialmente las aspiraciones del sector de la burguesía nativa que rodea a Costa e Silva, sin alterar los elefantiásicos beneficios que el capital norteamericano extrae de este gigantesco Puerto Rico del cono sur.

De hecho, el nuevo mariscal presidente ha cambiado ciertos estilos: habla sonoramente sobre «*el desarrollo acelerado*», propugna de labios afuera un ambiguo «humanismo», elude la aplicación de nuevas privaciones de derechos políticos, ofrece alguna seguridad a la reducida (y mediatizada) oposición parlamentaria, permite ciertas bravatas independentistas de sus ministros. Pero nada más: esta nueva aplicación de la célebre máxima del Gatopardo conduce exclusivamente

a asegurar los intereses fundamentales de Estados Unidos. El documento confidencial de la Escuela Superior de Guerra lo confirma plenamente, revelando que Costa e Silva no es más que la cabeza visible de un poder manejado por el Estado Mayor del ejército brasileño y sus tutores del Pentágono.

Vale la pena recordar un antecedente directo del esquema propuesto por ese documento confidencial: la llamada «*doctrina Couto e Silva*», expuesta en un breve folleto publicado en 1957 bajo el título *Aspectos geopolíticos de Brasil*. Su autor, Golberi Couto e Silva, conocido como un erudito en temas de geopolítica, fue encargado tras el golpe de abril (que determinó la revalorización de su «doctrina») de una oficina de informaciones —«una miniatura de la CIA», según un observador argentino— que contaba entonces con casi 2,000 agentes. En su folleto, Couto e Silva desarrolla la tesis de una *barganha leal* (canje leal) entre Brasil y Estados Unidos, por el cual aquél se asocia a la política de defensa de Washington en el Atlántico Sur a cambio de que se le reconozca «*el casi monopolio de dominio en esta área*»: dos párrafos son suficientes para ejemplificar esa tesis:

«Cuando entre nuestros vecinos hispanoamericanos recrudece sin dis-

fraces una oposición a Estados Unidos de América que se enmascara de “tercera posición” o de cualquier rótulo, aprovechándose, exactamente, de aquel enfoque allende-Atlántico y allende-Pacífico de los intereses primordiales norteamericanos, el Brasil parece estar en condiciones superiores, por su economía no competitiva, por larga y probada posición de amistad y, sobre todo, por los recursos decisivos de que dispone, para una *barganha leal* —el manganeso, las áreas monacíticas, la posición estratégica del Nordeste y de la desembocadura amazónica, con su tapón de la isla de Marajó— de negociar una alianza bilateral más expresiva que no sólo nos asegure los recursos necesarios para concurrir sustancialmente en la seguridad del Atlántico Sur y defender, si fuera el caso, aquellas áreas brasileñas que están expuestas a las amenazas extracontinentales, contra un ataque envolvente al territorio norteamericano vía Dakar-Brasil-Antillas; sino, una alianza que, por otro lado, traduzca el reconocimiento de la real estatura del Brasil en esta parte del océano Atlántico, poniendo término a cualquier política bifronte y acomodaticia con relación a nuestro país y a la Argentina, ambas naciones, por ejemplo, igualmente contempladas, contra todas las razones y

todas las evidencias, en armas de guerra naval». (...) «También el Brasil puede invocar un *destino manifiesto* tanto más cuanto él (el destino) no choca, en el Caribe, con los de nuestros hermanos del norte».

La única diferencia fundamental entre la tesis de Couto e Silva y el esquema estratégico trazado ahora por los mariscales de la Escuela Superior de Guerra (ESG) radica en el precio que Brasil debe pagar para convertirse en «satélite privilegiado» de Estados Unidos; no alcanza una alineación de sus acciones militares con las directivas del Pentágono y de su política internacional con la diplomacia del Departamento de Estado, sino que ha sido necesaria la total enajenación de las riquezas nacionales en favor de los intereses monopolísticos que sustentan toda la estructura imperial y cuya instrumentación teórica para uso de las neocolonias es prevista por el Fondo Monetario Internacional. La *barghana* se ha concretado, pero hasta algunos de los sectores comprometidos en el golpe de abril dudan que haya sido *leal*.

## LOS DUEÑOS DEL BRASIL

Basta una rápida y superficial confrontación entre las líneas trazadas por el documento de la *Sorbonne*

en el campo socioeconómico y la actual realidad brasileña para comprobar hasta dónde ese aparente propósito de «*desarrollo nacional*» supervisado por el FMI ha servido a los intereses norteamericanos más que a los propios brasileños:

«Significa un enigma lo que los mariscales brasileños entienden por «*contener la inflación*»: en los primeros veintiún meses del régimen militar se habían emitido ya 1.385,000.000.000 de cruzeiros (contra 694,000.000.000 emitidos en 30 meses de administración Goulart), mientras la expansión de los medios de pago —procurada a través de las llamadas «Obligaciones Reajustables del Tesoro»— generaba un gigantesco empapelamiento que confluía a la agudización del proceso inflacionario. Según el First National City Bank, a fines de agosto de 1966, Brasil tenía la más fuerte desvalorización de su moneda en 1965 (32,8%) y el promedio mayor de depreciación monetaria en 10 años entre 45 países estudiados. Entre 1964 y 1966, en sólo dos años de gobierno militar, el cruzeiro experimentó una devaluación del 150%.

Contrariando una vez más las previsiones contenidas en las recetas del FMI, esta aceleración de la tasa inflacionaria no ha logrado sino agudizar la recesión económica. La restricción de los créditos privados

y la reducción de compras del gobierno dentro del país son algunos de los factores que han influido en esa recesión; otro factor está constituido por la política de congelación de salarios. Algunos indicios reveladores sobre esta recesión pueden hallarse en las cifras de importación: en 1960, Brasil importaba materias primas por 450.4 millones de dólares; en 1965, esa cifra había descendido hasta 359.9 millones, recuperándose sólo parcialmente en 1966, con 427.9 millones; las únicas materias primas cuya internación se vio acrecentada (de 121.6 millones en 1960 a 151.1 en el 65 y 195.4 en el 66) fueron las destinadas a la industria química farmacéutica, mayoritariamente dominada por capitales norteamericanos. También descendió la importación

de bienes de capital: 492.2 millones de dólares en 1960, 229 en 1965, 347.6 en 1966. Simultáneamente, creció la importación de manufacturas (de 152.6 millones en el 60 a 22.7 en 1966) y de alimentos (168.6 y 231.1 en los mismos años). Entretanto, el dinero puesto en circulación ha servido para estimular y ayudar a las empresas extranjeras que operan en el país. Abundar sobre algunos detalles de la penetración de capitales norteamericanos en la vida económica del Brasil sería por lo menos recurrente. La ocupación financiera del país resulta claramente evidenciado a través de este cuadro elaborado por Paulo R. Schilling, sobre la participación porcentual de la dominación extranjera en los principales rubros de la economía brasileña:

Energía eléctrica .....	72 %
Industria automovilística .....	90 "
Molienda y distribución de trigo .....	73 "
Producción de portland .....	63 "
Artículos de caucho .....	90 "
Derivados del petróleo (distribución) .....	95 "
Siderurgia .....	50 "
Comercio de exportación .....	60 "
Fabricación de máquinas .....	70 "
Industria de la construcción naval .....	85 "
Tejidos .....	50 "
Industria farmacéutica y de perfumería .....	85 "
Carnes en conserva .....	80 "
Tabaco y cigarros .....	85 "
Industria química .....	50 "
Plásticos .....	50 "

El mismo Schilling ha revelado algunos hechos que ayudan a ubicar claramente el objetivo de algunas medidas previstas por el memorándum de la ESG (*«incentivar... la aplicación del ahorro popular en inversiones industriales...»*), al referir:

«Hay que considerar, todavía, que en muchos casos una participación minoritaria de no más del 20 ó 30% permite el control de las empresas, principalmente de aquellas que obtienen sus recursos por la suscripción popular de acciones. Por intermedio de los fondos de inversiones, los grupos extranjeros pusieron a la economía nacional a su servicio. La CRESCINCO (grupo Rockefeller) fue el primero de estos fondos que se organizó en el Brasil, estableciéndose luego muchos otros. Obteniendo, por medio de la suscripción de acciones los recursos del pueblo, que emplean en empresas extranjeras, los fondos de inversiones fortalecieron el dominio del capital monopolista extranjero. Reflejos exteriores de estas maniobras, no comprendidas por la mayoría del pueblo, fueron las “nacionalizaciones” de diversos trusts extranjeros como el Swift, la Standard Oil del Brasil y la Light and Power».

Desde el café (que representa promedialmente el 50% de la entrada

de divisas del Brasil, pero cuya comercialización exterior está manejada en un 99.21% por empresas privadas, entre las cuales las seis mayores, norteamericanas, dominan más del 30%) hasta el manganeso (que, aunque sólo representa para Brasil un 2.5% en la obtención de divisas, contribuye considerablemente a la industria siderúrgica norteamericana y es directamente extraído, procesado y exportado por la U.S. Steel, la Bethlehem Steel o sus filiales), todas las riquezas brasileñas están hoy por hoy en manos de los monopolios norteamericanos. Esta apropiación se ha cumplido por muy diversas vías; en algunos casos, ni siquiera ha significado entrada de capitales, ya que las empresas extranjeras se han servido de créditos de los bancos brasileños (dominados, a su vez, por consorcios yanquis), hasta extremos insólitos: incluso la banca oficial ha llegado a destinar un 70% de sus créditos a industrias que benefician a inversionistas extranjeros; sólo ahora, cuando es difícil concebir una mayor alienación de las riquezas nacionales, el régimen accede parcialmente a algunos reclamos del empresariado nacional, obligando a los bancos a orientar un 50% de sus créditos en servicio de la industria nativa.

## LO QUE TRAEN Y LO QUE SE LLEVAN

Una relación comparativa entre las inversiones extranjeras y las remesas al exterior en tres años de régimen militar resulta por demás reveladora:

—las inversiones directas ascendían a 30 millones de dólares en 1963 y 28 millones en 1964; en 1965 ya alcanzaban los 70 millones y en 1966 llegaban a 170 millones;

—las reinversiones significaban 57 millones en 1963, 58 millones en 1964, 84 en 1965 (no hay datos confirmados para el 66);

—los empréstitos y financiamientos han crecido de 262 millones (1963) a 382 millones (1966);

—en total, la inversión extranjera, en sus distintas formas, alcanzaba a 349 millones de dólares en 1963; en 1966, aún sin contar las reinversiones, había llegado a 552 millones;

—entre tanto, las remesas al exterior por concepto de rendimiento de capitales iban de 147 millones en 1963 a 250 millones en 1966; por transacciones gubernamentales, de 48 a 55 millones; por servicios diversos (patentes, royalties, asistencia), de 49 a 113; por fletes y seguros, de 153 a 130 (el descenso en este rubro responde a la caída de las importaciones);

—el total de las remesas al exterior era de 420 millones en 1963, 433 en 1964; 603 en 1965 y 618 en 1966;

—las remesas al exterior superaron a la inversión de capitales en 71 millones durante 1963, 121 millones en 1964, 192 millones en 1965 y 66 millones de dólares en 1966;

—un punto de referencia: entre 1963 y 1966, la deuda externa de Brasil se incrementó en 516.9 millones de dólares.

Vale la pena anotar otro detalle significativo: en 1965, debido al descenso de las importaciones, la balanza de pagos brasileña arrojó un saldo favorable de 400 millones de dólares; el gobierno invirtió el superávit en... títulos de deuda pública de Estados Unidos.

Este es, a grandes líneas, el fiel retrato del «desarrollo nacional» que dicen promover los teóricos del gobierno del Estado Mayor brasileño; en este contexto, no es extraño que, junto a la edulcorada prosa «desarrollista» que da pie a la desembozada subasta de las riquezas nacionales, el documento confidencial de la Sorbonne llegue hasta el extremo de contemplar explícitamente la promoción multilateral de «razonables garantías» para las inversiones extranjeras, por ejemplo.

Por este camino no es tampoco difícil avizorar hacia dónde conducen



las líneas estratégicas elaboradas por los mariscales brasileños y sus inspiradores norteamericanos en campos como la educación y la salud pública. Por lo menos dieciséis acuerdos de «colaboración», sin contar los estaduales, han sido firmados entre Brasil y Estados Unidos para llevar a cabo planes de enseñanza; el planeamiento general de la educación, puesto en manos de una comisión integrada por cinco brasileños y cinco norteamericanos, ha derivado en la reciente creación de un «superministerio» que controlará la vida estudiantil; la «reforma» universitaria ha sido realizada según lineamientos surgidos de la USAID; hay «técnicos» norteamericanos hasta en las más humildes escuelas rurales; capitales yanquis controlan más del 80% de la industria farmacéutica; el escándalo de las «serpentininas anticonceptivas», que pastores norteamericanos distribuyeron en la región amazónica, sin mayores cautelas sanitarias —resultado: más de 3000 mujeres esterilizadas y muchos casos de infección—, ha dado una prueba de algunas de las «soluciones» preconizadas por Estados Unidos para los graves problemas provocados por la superpoblación: agentes de la USAID intentaron sobornar con un millón de dólares a tres obispos brasileños (la información fue confirmada por

éstos) para que aprobaran la aplicación de medidas anticonceptivas como éstas en Brasil.

## LA MISION DE COSTA E SILVA

Sin entrar todavía a analizar la servidumbre de la política militar a los intereses del Pentágono, basta con sumar a este amargo panorama el vasallaje total al Departamento de Estado que caracteriza a la política exterior del Brasil de hoy para apreciar exactamente cuál ha sido el precio pagado por el gobierno del Estado Mayor para convertirse en «satélite privilegiado» de Washington y obtener el respaldo norteamericano a su triste ambición subimperial. El esquema trazado en el documento confidencial de la *Sorbonne* no es más que la constancia contable de ese precio; hasta el 15 de marzo, Castelo Branco abonó en los plazos previstos cada uno de los pagarés firmados por la gorilocracia en abril de 1964; reformó la Constitución, impuso una ley de seguridad (que incluso un alto militar ha calificado de «fascista», acató sumisamente las instrucciones del FMI, providenció todas las medidas requeridas por los intereses monopolistas (en este sentido, el decreto que exime de impuestos a las empresas internacionales que los pagan en su país de origen fue cierta-

mente un broche de oro), adaptó toda la legislación a la institucionalización del poder militar. Algunos meses después, pudo morir en paz con su congénito entreguismo. La segunda etapa viene siendo cumplida por Costa e Silva, y su camino ya está trazado.

Ya en 1962, el *New York Herald Tribune* anotaba: «Si perdiéramos el Brasil, el gigante de América Latina, estaríamos en camino de perder a todo el continente, con los billones de dólares de inversiones norteamericanas, públicas y privadas, que esto significa.» De entonces acá, esos billones han crecido, pero hoy parece difícil (como lo señalara Ernesto Guevara en su mensaje a la Tricontinental) que Estados Unidos pueda obtener más que lo que ya tiene en América Latina; lo que ahora busca es consolidación y protección. Así, a la satelización sucede la ocupación; en los planes del Pentágono, Brasil es la cabecera de puent para esa ocupación. Como el también brasileño Panasco Alvim en la FIP que cohonestó la intervención norteamericana en Santo Domingo, Costa e Silva asumirá en el continente —según prevé Washington— la jefatura formal de esa fuerza de ocupación.

En el aspecto interno, como confiesan involuntariamente en su documento secreto, los mariscales y sus

socios norteamericanos están solos; todas las restantes fuerzas del país, estudiantes, trabajadores urbanos y rurales, empresariado nacional, configuran «presiones» antagónicas al gobierno del Estado Mayor. Las dos primeras representan los mayores riesgos para el régimen, que las juzga más agresivas; la viga maestra de su acción contra ellas es la Ley de Seguridad, collar de hierro que cercena hasta las más mínimas expresiones de oposición. Paralelamente, el esquema de la ESG prevé la disminución de las tensiones internas por la vía de una conciliación con algunos sectores de la burguesía nacional, que tras haber apoyado el *putsch* de abril vio crecientemente frustradas sus ambiciones en todos los planos; Costa e Silva es el instrumento de este pretendido «rescate» del empresariado, a algunas de cuyas figuras ha colocado en puestos de gobierno. Pero esta participación es apenas formal; privado de su base de sustentación por la voracidad de los monopolios norteamericanos (algún ácido humorista ha dicho que la única industria productiva que aún está en manos brasileñas es la confección de banderas estadounidenses para cubrir la creciente demanda provocada por las periódicas quemadas públicas del emblema imperial), el sector golpista de la burguesía no constituye sino un

instrumento más en la institucionalización del régimen militar.

Magalhaes Pinto, uno de los figuras mayores de esa burguesía y ahora canciller de Costa e Silva, ha llegado a declarar (*Le Monde*, mayo 10): «Los problemas de seguridad no serán resueltos sino en la medida en que lo sean los problemas económicos». A primera vista, la frase procura una indirecta respuesta al planteo de Onganía durante la reunión presidencial de Punta del Este, pero —más allá de la intención del flamante canciller brasileño— el entrelazamiento previsto por el gobierno del Estado Mayor para los rubros de «seguridad» y «desarrollo» no contempla ciertamente una prioridad para este último, sino, por el contrario, su supeditación a los intereses de la «seguridad». El propio Castelo Branco se encargó de aclararlo en los salones de la *Sorbonne* dos días antes de abandonar la presidencia: «Desarrollo y seguridad, a su vez, están ligados por una relación de mutua causalidad. Por un lado, la verdadera seguridad presupone un proceso de desarrollo, sea económico, sea social. Económico porque el poder militar está también esencialmente condicionado a la base industrial y tecnológica del país. Social, porque aun un

*desarrollo económico satisfactorio, si va acompañado de excesiva concentración de la renta y creciente desnivel social, genera tensiones y luchas que impiden la buena práctica de las instituciones y acaban comprometiendo el propio desarrollo económico y la seguridad del régimen».*

El memorándum de la ESG se encarga de ubicar este concepto en sus más crudas implicaciones: el imperio, a través de los regímenes militares que le sirven, procura una conciliación formal con algunos sectores de la burguesía, una improbable disminución de las tensiones internas mediante la acción conjugada de un rígido aparato represivo y de propuestas sobre un presunto «desarrollo nacional» (que, en los hechos, no es desarrollo ni es nacional, porque sirve a los intereses monopolísticos norteamericanos), una coordinación de las fuerzas policíacomilitares de América Latina para ejecutar la estrategia contrarrevolucionaria dictada por el Pentágono. Los dos primeros pasos vienen cumpliéndose en el «satélite privilegiado» brasileño. El tercero, también contemplado en el documento secreto de los mariscales, ofrece peculiaridades que merecen un análisis más detenido.

## EL GUARDIAN DEL PATIO TRASERO

El ejército argentino compra armas en Europa (incluyendo el área socialista) ante la renuencia del Pentágono en proporcionárselas; la cancillería brasileña emite comunicados en los que rechaza toda fórmula para la creación de dispositivos supranacionales en el ámbito continental. Periódicamente, episodios como éstos parecen conmover la imagen generalmente aceptada de los regímenes militares latinoamericanos como subordinados de Washington; tales episodios son prontamente utilizados por quienes procuran internamente una mayor base política para esos regímenes publicitando su presunto «nacionalismo», y no son pocos los desprevenidos observadores que ceden a la tentación de sumergirse en alambicadas especulaciones al respecto. Ubicados en el contexto de las vías entrelazadas que suele utilizar el imperio para alcanzar sus objetivos, empero, estos elementos en apariencia contradictorios revelan de hecho cuáles son los pasos inmediatos previsto por Estados Unidos para la acción de sus satélites latinoamericanos.

Algunos de ellos aparecen claros a la luz del documento secreto de la Escuela Superior de Guerra brasileña, que configura una transcrip-

ción del esquema estratégico del Pentágono para América Latina. Y, como surge de la mera lectura, el maniqueísmo político y el paranoico anticomunismo que vician las premisas de ese esquema estratégico no constituyen por cierto excusa suficiente para subestimar las amenazas que él conlleva para la integridad política de los países latinoamericanos.

El memorándum de los mariscales brasileños representa la culminación teórica y práctica de la tesis de interdependencia propugnada por los gestores del golpe del 64. El proceso de aplicación de esa tesis ha conducido al Brasil hasta una inserción global de su política en la estrategia internacional de Washington, tanto en el plano específicamente militar como en el económico y diplomático. Dos frases bastan para ilustrar el signo creciente de esa enajenación, unánimemente reconocida: *«Un amigo se encuentra en situación difícil. Nosotros, entonces, debemos mostrar que los amigos ciertos son los de las horas inciertas»*, dijo el canciller Leitao da Cunha en junio de 1965, justificando el apoyo brasileño a la intervención norteamericana en Santo Domingo; *«Lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para Brasil»*, diría más tarde su sucesor, Juracy Magalhaes, en frase que ha

pasado a la más triste historia del satelismo.

El parentesco directo de la estrategia propuesta por la *Sorbonne* con los esquemas del Pentágono para la «defensa del hemisferio» rompe los ojos del más desprevenido observador: los puntos básicos de las «hipótesis de guerra» consideradas por el documento reiteran puntualmente las evaluaciones del Estado Mayor Norteamericano (algunas de las cuales han sido parcialmente reveladas ante el Senado de los Estados Unidos en abril de 1967), y hacen por otra parte explícita referencia a «la impresión creciente» en Washington sobre determinados temas estratégicos; las medidas propuestas para hacer frente a la «agresión interna» pueden encontrarse incluso en la literatura oficiosa del Pentágono, como *Strategy for the Americas* de Joseph Reidy, exfuncionario del Ministerio de Defensa y del Departamento de Estado que sirvió en las embajadas norteamericanas en Río y Buenos Aires. Y no se trata sólo de coincidencias en torno a las connotaciones estratégico-tácticas de la guerra insurreccional («en el Brasil se diría guerra revolucionaria, pues el general Castelo Branco y el llamado grupo de la Sorbonne aún tienen una pizca de sofisticación militar francesa», apuntó un observador brasileño dos años atrás), sino tam-

bién y especialmente de una puntual atención hacia los intereses geoestratégicos del Pentágono en relación a una posible confrontación internacional, atómica o convencional (v. gr.: la consideración particular del litoral nordestino, que —por su proximidad al Africa y sus posibilidades en el control del tráfico marítimo atlántico— los «expertos» norteamericanos califican como «notable excepción» en la orientación mayormente caribeña de su estrategia continental).

## LOS ANTECEDENTES

Poco de esto es nuevo, por cierto, aunque hasta ahora no se conociera tan detalladamente. Desde el golpe militar de 1964, las cancillerías latinoamericanas han podido recoger una serie de inquietantes indicios al respecto, ahora confirmados hasta el exceso por el memorándum del Estado Mayor brasileño. Ese *desier* incluye:

—la revaloración de la doctrina expuesta en 1957 por Golbert Couto e Silva, que propone una *barganha* —canje— leal entre Brasil y Estados Unidos,, y a la que ya me referí en anteriores páginas.

—la instalación en Washington del Colegio Interamericano de Defensa (al que el entonces —y todavía— embajador brasileño en la OEA, Ilmar Pena Marinho, califi-

cara de «escuela de dictadores») y el entredicho surgido a su propósito entre la cancillería brasileña y el Estado Mayor de las FFAA. En 1965, el periodista —ahora también diputado— Hermano Alves recordaría el incidente en estos términos: «Itamaraty,<sup>12</sup> entonces conducida por el profesor San Thiago Dantas, se opuso tenazmente a la creación de ese Colegio. El entonces subsecretario de estado para Relaciones Exteriores del gobierno brasileño, el diputado Renato Archer, trabó un conflicto prolongado con el ministro de Guerra, general Segadas Viana, que insistía en matricular oficiales brasileños en aquella academia desaprobadada por Itamaraty. La Comisión Militar Mixta Brasil-Estados Unidos trabajaba intensamente para que el ejército brasileño crease una situación de hecho, desautorizando al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y fue lo que ocurrió. Aunque el Congreso, por recomendación de Itamaraty, no aprobase la contribución financiera del Brasil al Colegio Interamericano de Defensa, el Ministerio de Guerra pasó a matricular oficiales en aquel establecimiento —para lo que contaba, apenas, con el permiso del Estado Mayor de las FFAA., en esa

época encabezado por el general Araujo Mota. Lo curioso es que, cuando el profesor San Thiago, como ministro de Hacienda, fue a Washington, algunos oficiales brasileños, matriculados en el Colegio, lo buscaron para decirle que estaban disgustados con el carácter supranacional de la instrucción que les era suministrada. Llegaron, incluso a declararle que consideraban contrarias a los intereses nacionales brasileños las enseñanzas teóricas que recibían—» el documento confidencial —característica AAA/520.1 (22)—que circuló entre Itamaraty y la embajada norteamericana en Río en marzo de 1965, durante los preparativos para la conferencia de cancilleres de OEA prevista para mayo y luego fallida a raíz de la intervención estadounidense en Santo Domingo. Ese documento (en el que puede encontrarse ya la teoría de las «fronteras ideológicas», explícitamente formulada algunos meses más tarde en la proclama de Uruguayana) comentaba la propuesta norteamericana de «una alianza del Hemisferio», respaldándola, y ofrecía a Washington «muchísima documentación sobre las actividades subversivas en el Brasil antes de abril de 1964» y pruebas acerca de una presunta «infiltración extremista en los altos escalones gubernamentales en varios paí-

<sup>12</sup> Nombre que se le da al Ministerio de Relaciones Exteriores en alusión al edificio que ocupa. (N. de R.)

*ses del hemisferio»; sugería veladamente en sus entrelíneas la posibilidad de que tropas latinoamericanas participaran en conflictos extracontinentales mantenidos por Estados Unidos, lo que seguramente venía a significar un nuevo y nada desdeñable elemento de trueque para la *barganha leal*. Además, proponía un entendimiento *tête a tête* entre Brasil y Estados Unidos, en estos términos:*

«Con relación a la alianza sugerida el gobierno de Brasil está en un todo de acuerdo, siempre que las condiciones de ayuda mutua en caso de interferencia externa sean formuladas con máxima precisión y teniendo en cuenta las particularidades de las Américas. Sólo así sería posible evitar las experiencias negativas que se muestran patentes en la Organización del Tratado del Sudeste de Asia. Las sugerencias del gobierno brasileño en cuanto a los gobiernos específicos, serán discutidas con las autoridades de los Estados Unidos y con la Junta Interamericana de Defensa por el ministerio de guerra del Brasil. En esta ocasión se tratará también de resolver la mejor forma posible de permitir a las fuerzas americanas influir positivamente en otras áreas del mundo en las que está en juego el destino de la democracia y la libertad».

228

—la decidida participación de Brasil en la llamada Fuerza Interamericana de Paz con la que la OEA coonestó la intervención militar norteamericana en Santo Domingo, que significó al ejército brasileño la jefatura formal de dicha fuerza. De hecho, la jefatura real de la FIP (a la que Brasil contribuía con apenas una décima parte del total de tropas) estaba en manos del general estadounidense Bruce L'almer; éste llegó a declarar a la prensa de su país que, si recibiera órdenes contradictorias del general brasileño y de sus propios superiores del Pentágono, no dudaría en acatar estas últimas— el amago —prontamente ocultado— de intervención en Bolivia por esa misma época (mayo de 1965). Mientras se organizaba la FIP, el gobierno de Castelo Branco hizo declaraciones en el sentido de que estaba dispuesto a enviar tropas a Bolivia para evitar un gobierno extremista, ante la movilización popular en los distritos mineros que desembocarían en una masacre por cuenta del propio gobierno boliviano. Coincidentemente con esas declaraciones, hubo desplazamientos de unidades militares norteamericanas en el Pacífico y trascendió que Washington habría consultado con Chile para pasar tropas hacia Bolivia a través de su territorio, a lo que el gobierno de Frei se negó.

## EL AVAL DEL PENTAGONO

La proclamación de la tesis de las «*fronteras ideológicas*», las reiteradas amenazas intervencionistas —dirigidas fundamentalmente contra el Uruguay—, el indisimulado empeño en apoyar y promover la creación de una fuerza militar interamericana en el marco de la OEA, constituyen persistentes elementos probatorios (cuyos detalles son obviales en virtud de su amplia divulgación) sobre la enajenación de la política brasileña en favor de los esquemas estratégicos norteamericanos. El documento secreto de la Escuela Superior de Guerra confirma palmariamente esa enajenación pero, simultáneamente, habilita una comprobación lateral: por lo que surge del memorándum, el Pentágono ha otorgado plenamente su aval a las propuestas brasileñas de *barganha leal*. De tal manera, la estrategia combinada con los mariscales brasileños contempla en principio las aspiraciones expansionistas de éstos, decididos a resumir las funciones gendarmeriles que sus antecesores cumplieron hace un siglo para el imperio británico.

Así, mientras Brasil atiende a las necesidades estratégicas de Estados Unidos para cualquiera de sus «*hipótesis de guerra*» (preparación de núcleos combinados de las FF.AA.

para participar en la «*defensa de la democracia*», en el continente o fuera de él; cesión de territorios para bases de proyectiles, como la ya instalada en Natal, y de materiales estratégicos, como los extraídos en la cuenca amazónica, sin contar con los recursos y el apoyo diplomático que Washington recibe de su «*socio mayor*» latinoamericano), obtiene a su vez una relativa carta blanca en la prosecución de sus intereses subimperiales. Notoriamente, la tesis de las «*fronteras ideológicas*» funciona en un sólo sentido; ya en 1965, el entonces canciller Leitao da Cunha dejaba entreverle en una carta dirigida a *Correio da Manhã* comentando un editorial de éste sobre el tema: «*Al recomendar el examen de los conceptos de soberanía y no intervención, quedó implícito que esto es materia soberana de los estados. No dejan éstos de ser soberanos cuando libremente deliberan sobre la naturaleza y extensión de su soberanía*». Los mariscales brasileños, que pretenden imponer a sus vecinos la resignación de las fronteras físicas, defienden a ultranza sus propias fronteras, tal como surge de la estrategia expuesta en el memorándum de la ESG.

Al incluir a Uruguay y Guyana como «*áreas estratégicas*» de sus planteos geopolíticos, el gobierno del Estado Mayor procura man-



tener a raya —al parecer, apelando incluso a la intervención armada— las fronteras de Venezuela, país con el cual mantiene un prolongado diferendo territorial en la región guayánica, y las de Argentina, su tradicional rival en la pretendida hegemonía del continente. Pero, al mismo tiempo, esas áreas cuentan en la estrategia del Pentágono: la frontera brasileño-venezolana (y aun, supone Estados Unidos, la propia Guyana) plantea el eventual riesgo de penetración guerrillera hacia la explosiva zona del Nordeste; Uruguay, por su parte, al momento de elaborarse el documento, preocupaba a los estrategas norteamericanos en razón de las libertades sindicales, de información y de movimiento que aún conservaba, constituyendo en este sentido una suerte de mosca blanca entre el bloque de regímenes militares que lo circundan. Asimismo, la protección de las fronteras brasileñas (con todos los países del continente salvo Ecuador y Chile) no está exclusivamente dictada por el interés expansionista del «satélite privilegiado», sino que entronca con el propósito norteamericano de prevenir la coordinación entre los movimientos armados que actúan o pueden actuar en América Latina.

Con estos objetivos a la vista, los mariscales brasileños comenzaron, apenas llegados al poder, una veloz

carrera armamentista. Entre 1954 y 1963, la participación de los ministerios militares en el total de gastos generales oscilaba entre un 14 y un 17%; poco después del *putsch* (en abril mismo, los militares brasileños se autoduplicaron el sueldo), el embajador Augusto Federico Schmidt decía en *O Globo* —ciertamente, ni uno ni otro podrían ser calificados de «subversivos»— que los gastos militares ya estaban consumiendo un 40% de los ingresos presupuestales. En 1965, Brasil adquirió armas a Estados Unidos por 2,5 millones de dólares; en 1966, sus compras ascendieron a 12 millones, incluyendo una partida de 100 tanques M-41. En agosto de 1966, el gobierno del Estado Mayor adquirió la patente belga para fabricar en el país los fusiles automáticos FAL; las plantas de municiones están en expansión, existen proyectos en avanzado grado de concreción para activar la industria química con fines bélicos (napalm, gases asfixiantes, explosivos), incrementando la producción de plantas ya existentes en San Pablo y Minas Gerais; también se han incrementado las industrias de armas portátiles automáticas, como la de Itajubá y la INA, dedicadas respectivamente a la fabricación de fusiles y de metralletas. En los últimos meses de 1966 se anunció la ins-

talación en San Pablo de una planta de construcción de aviones, destinados a «*finés bélicos y civiles*»; las informaciones destacaban que esos aviones resultaban muy apropiados para el transporte a media distancia de unidades de comandos, ofreciendo «*una gran versatilidad para el uso militar contrainsurreccional*». La construcción de una fábrica de «*aviones de uno y dos motores, otros aparatos anfíbios y helicópteros*» en Minas Gerais ha sido ahora oficialmente anunciada por el grupo germanoccidental Dornier.

Pero el Pentágono debía aún sor-tear un obstáculo para completar su estrategia de contrarrevolución a nivel continental: la «*presión político-histórica*», como la llaman los generales de la *Sorbonne*. En buen romance, la tradicional rivalidad entre los militares argentinos y bra-sileños.

## LOS BRAZOS DEL PENTAGONO

«*Un oscuro general, con el pecho cubierto por una constelación de condecoraciones brasileñas, es la mayor preocupación de la cancillería y del Estado Mayor de Argentina y del Brasil*»; dos años atrás, un periodista argentino describía así a Alfredo Stroessner, «*presidente*» vitalicio del Paraguay, por enton-

ces protagonista de una encendida disputa con el Brasil en torno a la región de los Saltos del Gaurá. En 1967, al tiempo que se iniciaba la construcción de la represa de Aca-ray —que, desde territorio para-guayo, proveerá de enería eléctrica a algunas regiones de Brasil y Ar-gentina—, la importancia de Stro-essner para cancilleres y militares de los dos países mayores del con-tinente había cambiado su signo: en sus manos parecía encontrarse una clave no de enemistad sino de conciliación. De hecho, ese nuevo papel de Stroessner obedecía a las más recientes directivas del Pentá-gono, que continuaba editando fór-mulas para lograr una mayor or-questación de las fuerzas represivas del continente.

Durante largo tiempo, la política de Washington respecto a Argen-tina y Brasil fue procurar un osci-lante desequilibrio en la correlación de fuerzas, apoyándose en uno u otro según sus conveniencias. Esa estrategia (basada en el fomento de lo que el historiador norteamerica-no Nicholas Spykman llamó *natural conflict* entre los dos países) favoreció largamente al país nor-teño en los años previos a la se-gunda guerra mundial, mientras Argentina era apuntalada por el todavía influyente imperio británi-co. En la década del 40, la coinci-dencia —no demasiado concreta,

por cierto— entre Perón y Getulio Vargas asordínó momentáneamente ese «conflicto natural». Pero ya en los años finales de la década siguiente y en los primeros 60, y por encima de los intentos conciliadores de Frondizi y Janio Quadros, la oposición volvió a adquirir filosas aristas, ahora decididamente a nivel de los ejércitos. Las decenas de documentos y análisis manejados por los altos mandos argentinos revelan, en lo que un cáustico observador definió como «una antología del resentimiento» que los favores del Pentágono se han encaminado mayoritariamente hacia el país norteño: en abril de 1966, el propio Departamento de Defensa norteamericano hizo públicas las cifras de asistencia militar recibidas por los países latinoamericanos entre 1950 y 1965, según las cuales Brasil figuraba como destinatario de casi un 35W del total (171 millones sobre 486 millones de dólares) y aparecía igualmente a la cabeza de los créditos para compra de material militar y de plazas para entrenamiento de oficiales en bases norteamericanas.

Durante este período, sólo en una oportunidad la balanza pareció inclinarse en favor de Argentina. En setiembre de 1961, cuando Goulart asumió la presidencia tras la «Gran Crisis» desatada por la oposición militar a su investidura,

las autoridades del Pentágono «*llamaron la atención*» a la oficialidad del ejército argentino sobre «*el peligro que representaba Brasil para la estabilidad de América Latina*»; y cuando Frondizi fue depuesto, los militares argentinos comenzaron a recibir equipos modernos provenientes de Estados Unidos, incluyendo pertrechos que permitían la creación de una brigada especial para llevar a cabo acciones fuera de las fronteras nacionales. El golpe de abril volvió la correlación de fuerzas a su *status* anterior, y aun agudizó el desequilibrio, transformando decididamente a Brasil en el «*satélite privilegiado*» de Washington. El *natural conflict* tornó a hacerse tenso al instituirse la FIP para actuar en la Dominicana; el gobierno de Illia prestó su aprobación en la OEA pero se mostró renuente al envío de tropas, pese a las indisimuladas presiones castrenses. Onganía, entonces comandante en jefe del ejército, había obtenido de Averell Harriman la promesa de que el comando de la Fuerza Interamericana estaría en manos de algún país centroamericano, a los efectos de evitar la elección entre Brasil o Argentina; la no participación de ésta, empero, determinó el nombramiento del brasileño Panasco Alvim para la jefatura formal en Santo Domingo. Según los milita-

res argentinos, las vacilaciones de la Casa Rosada habían permitido a Brasil obtener una sensible ventaja sobre sus rivales del Plata (y, de alguna manera, este factor también llegó a pesar en el movimiento militar que derribó a Illia en junio de 1966). Incidentalmente, el oficial designado por Castelo Branco para el comando de las tropas brasileñas en Santo Domingo —como hombre de confianza del mariscal-presidente—, además, verdadero poder detrás del indeciso Panasco Alvim —resultó ser el coronel Meira Matos, conocido por sostener la tesis de que hay en Argentina *«una permanente conspiración racista contra Brasil»*, cuyo campo de batalla más crítico se encuentra en Paraguay y Bolivia; como agregado militar en la Paz durante algunos años, Meira Matos había sido acusado por los servicios de inteligencia argentinos de mantener una actitud de *«intriga y deliberada provocación contra la Argentina»*.

Sin embargo, algunos meses después se hizo evidente un acercamiento entre los militares argentinos y brasileños: el todavía comandante en jefe y actual mandatario del régimen militar: Juan Carlos Onganía, y el ministro de Guerra y hoy cabeza visible del gobierno de Estado Mayor, Arthur Costa e Silva, lanzaron su ya célebre proclama

sobre las *«fronteras ideológicas»*; al poco tiempo, Onganía desataría un nuevo escándalo con su carta al inspector general del ejército uruguayo, invitándolo prácticamente a participar de la flamante cofradía militar. Algunos sectores del ejército argentino, con todo, conservaban aún ciertas reservas, justamente basadas en la posición de privilegio obtenida por Brasil mediante su abierta asociación con Estados Unidos; *Clarín*, un diario argentino que suele ser considerado como intérprete de algunos círculos castrenses, expresó entonces: *«Estamos ante una resurrección de la vieja estrategia del “país llave”, a que tantas veces se han inclinado en el pasado los planificadores de la diplomacia norteamericana. Esa política se basa en la doble idea de que en cada región existe un país naturalmente líder y que es en ese país donde debe concentrarse el esfuerzo de ayuda exterior de los Estados Unidos. (...) No creemos que esa estrategia tenga futuro. (...) A la Argentina le interesa primordialmente el desarrollo económico y la paz social en Brasil. Pero de allí a homologar que la integración continental debe hacerse bajo la dirección de Brasil, y que se vuelva a pensar en términos de “país llave”, hay una gran distancia»*.

¿Se ha recorrido ya esta distancia? Los exponentes de la tesis de las «*fronteras ideológicas*» están hoy formalmente en el poder, y el Pentágono necesita de un acuerdo para conformar la fuerza militar que lleva a cabo la represión contra los movimientos armados de liberación; pero en uno y otro bando existen todavía reservas: los mariscales brasileños no parecen dispuestos a resignar la posición de predominio ya lograda y los argentinos se muestran renuentes a aceptar la ventaja de sus vecinos y rivales de ayer. Las dificultades interpuestas por algunos países latinoamericanos a la creación de una fuerza militar permanente en el marco de la OEA —que, por su mismo carácter mayoritario, podría diluir el tradicional enfrentamiento entre ambos ejércitos— han obligado a Washington a buscar otras vías de conciliación. En los últimos meses de 1966, algunos observadores señalaron que esa tarea de celestinaje parecía haber sido confiada al gobierno de Bolivia, otro hijo predilecto del Pentágono: tras el proyecto de la Cuenca del Plata, tras los viajes de René Barrientos, tras los propios intereses monopolísticos que la iniciativa conllevaba, llega a atisbarse la intención de crear un «club de los generales» del cono sur, que, de paso, al intentar que Uruguay se integrara al proyecto,

contribuía a neutralizar su presunto «peligro» en el seno de la nueva internacional gorila.

Los militares argentinos parecieron acoger con entusiasmo la idea (cuya paternidad putativa, por otra parte, les era adjudicada en algunos círculos del continente, como los chilenos, declaradamente alarmados por el aislamiento que el proyecto parecía augurarles), por lo menos con más entusiasmo que Brasil, cuya cancillería se mostró marcadamente reticente durante las semanas previas a la reunión de cancilleres realizada en Buenos Aires en febrero del 67, lugar y fecha que también servirían de marco a las primeras negociaciones conjuntas sobre el plan de Cuenca del Plata. De hecho, el ajedrez geopolítico a que invitaba Barrientos ofrecía para los argentinos un interés adicional: la posibilidad —o la ilusión— de nutrir su industria siderúrgica (léase también industria de guerra) en los yacimientos de hierro bolivianos, quebrando de esa manera la dependencia de aquella con respecto al Brasil. Pero el estallido de la lucha guerrillera en Ñancahuazú, y la consecuente agudización de la inestabilidad de Barrientos, no sólo pusieron en evidencia la incapacidad congénita del ejército de Bolivia (que parecía inhibirlo de participar eficazmente en una fuerza militar regional o

continental), sino incluso interrumpieron las gestiones conciliatorias de Palacio Quemado. En rigor, la guerrilla de Nancahuazú revirtió a Bolivia a su papel de «campo de batalla» entre las ambiciones hegemónicas argentinas y brasileñas.

## CELESTINA DE RECAMBIO

Tras asumir el poder a cara descubierta en junio de 1966, los militares argentinos han debido reconocer que sus tradicionales rivales llevan ya una considerable ventaja en el «escalonamiento» de la estrategia norteamericana para América Latina. Procurando descontar en algo esa ventaja, han lanzado una ofensiva que parece nutrirse en dosis similares de obsecuencia y arrestos «nacionalistas»; en ese contexto se ubican ajustadamente la propuesta de institucionalización de la Junta Interamericana de Defensa, presentada por Costa Méndez en la conferencia de OEA en Buenos Aires, y el discurso de Onganía en la apertura de la reunión presidencial de Punta del Este, con sus explícitas alusiones a la «seguridad interna». Poco después de esa «cita en la cumbre», Marcel Niedergang dio a conocer en *Le Monde* algunas declaraciones del canciller argentino que vinieron a desatar una pequeña tormenta diplomática; según órganos allegados el régimen mili-

tar de Casa Rosada, Niedergang —a quien, pintorescamente, acusaban de «*inclinaciones chilenistas*»— habría «*atribuido*» a Costa Méndez «*dos espinosas afirmaciones*»: «La presencia de un foco de guerrillas en Bolivia, en la proximidad de la frontera con la Argentina, pone nuevamente de actualidad el tema de la «necesaria colaboración entre las fuerzas armadas americanas». «Si la asistencia militar a Bolivia se coordina y planifica en escala interamericana no habrá problemas. De otro modo podrían surgir ciertos inconvenientes con algunos vecinos: con Uruguay, por ejemplo, o con Chile, que sostiene entredichos con el gobierno de Barrientos a propósito del acceso de Bolivia al mar.»

En rigor, estas consideraciones iban dirigidas inocultablemente a prevenir, una vez más, una posible preminencia brasileña en la orquestación de «*la asistencia militar a Bolivia*». La intervención directa del Pentágono en el país del altiplano vendría a quitar entidad, momentáneamente, a los temores de Costa Méndez.

En algunas esferas del ejército argentino se evidencia periódicamente el empeño —habitualmente vano— de presentar una imagen «digna» frente a las presiones norteamericanas. A fines de mayo pasado, el semanario *Confirmado* (al que, en

esa misma edición, uno de sus lectores califica como «enrolado en la obsecuencia hacia los altos mandos militares») intentó demostrar la peregrina tesis de que Washington se ha avenido a reconocer una presunta Argentina «poderosa, independiente, altiva y hasta agresiva en ocasiones», que «no se resignó nunca a ocupar el papel de peón como ocurrió con otros países del hemisferio». Tan triste trovata incluía sin embargo un detalle revelador:

«Las caídas de Arturo Frondizi y de Arturo Illía fueron mal recibidas (por EE.UU.), pero el fenómeno sólo sirve para demostrar una vieja presunción argentina: en América del Sur, Estados Unidos hace ya un siglo que eligió a Brasil como *pivote* para su política zonal. El respaldo político y diplomático, las cuantiosas inversiones que le brindó en estos tres últimos años lo demuestran. Dean Rusk lo confesó públicamente hace apenas 15 días.»

En marzo de 1967 *Confirmado* anotaba, a propósito de la visita de Costa Méndez al Paraguay: «Argentina ha tomado, sin duda, conciencia de la importancia de este vecino, al cual contribuyó a exterminar como gran potencia hace un siglo. Sabe que la permanente rivalidad con Brasil —por amistosa que quiera pintársela ahora— no

cesa.» A fines de mayo, era el ministro de guerra brasileño, general Lira Tavares, quien visitaba Asunción; y, a su regreso, la prensa brasileña informaba sobre una propuesta presuntamente paraguaya (en verdad, no es difícil sospechar el origen real del proyecto) para coordinar la acción militar de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Pocos días después, el mismo Lira Tavares viajaba a Buenos Aires para entrevistarse con Onganía y otros jefes militares argentinos. La nueva fórmula conciliadora estaba en marcha.

En marzo, mientras el canciller Sapeña Pastor recibía en el aeropuerto de Asunción a su colega Costa Méndez, Stroessner despedía a su hijo que viajaba a Brasil para completar sus estudios militares; la anécdota informa superficialmente sobre una aparente equidistancia de Paraguay respecto a quienes fueron sus agresores un siglo atrás. Esa equidistancia ofrecía —en opinión de Washington— considerables garantías para el buen éxito de su misión.

Lo que los «ideólogos» del militarismo argentino parecen no querer ver es que esa presunta resignación de Washington ante una Argentina «independiente» esconde un propósito ciertamente sórdido: poco importa que el Departamento de Estado y el régimen de Onganía di-

sientan o se hagan mutuas reverencias a nivel diplomático, mientras el Pentágono orquesta un aparato militar con participación cierta del ejército argentino, incluyendo sus sectores sedicentes «nacionalistas». La cancillería porteña insiste sobre la institucionalización de la JID, y esa insistencia es explicable: al invocar la necesidad de crear un aparato militar en el marco del sistema interamericano, el régimen argentino intenta preservar una posición de presunta igualdad respecto a sus rivales nortños. Pero Brasil, que tiene información más directa sobre el rumbo con que hoy sopla el viento, puede permitirse un formal rechazo de la FIP, como el contenido en el comunicado de Itamaraty del 1º de junio último. Un cronista brasileño cercano al Palacio Santos ha referido los dos puntos centrales de ese comunicado en estos términos:

1/ «Para Brasil, la seguridad nacional es un problema de los gobiernos nacionales y de sus respectivas fuerzas armadas. Por lo tanto, un problema puramente interno. Aquí es rechazada de plano y sumariamente cualquier fórmula para la creación de dispositivos militares supranacionales para todo el continente».

2/ «En una segunda etapa, el comunicado hace algunas consideraciones y admite un cierto grado de colaboración militar en la lucha contra la subversión en los países americanos. En Itamaraty se acentúa, mientras tanto, el hecho de que el comunicado emplea el término “colaboración”, no “cooperación” ni mucho menos, “integración”».

He aquí un sabroso manjar para los especuladores: ¿Costa e Silva rechaza ahora lo que tan encendidamente defendiera antes Castelo Branco? ¿es cierto entonces que el nuevo régimen brasileño ha optado por una línea «independiente»? Por cierto que no: Costa e Silva y Castelo Branco son dos nombres distintos y un solo Dios verdadero: ambos han sido y son apenas la cabeza visible del gobierno del Estado Mayor. Lo que ha cambiado, momentáneamente, es sólo un detalle en la estrategia del Pentágono. La voz del amo se ha hecho oír.

## **EJERCITOS, NO GOBIERNOS**

El avance de la lucha guerrillera en varios puntos del continente y el surgimiento de nuevos focos armados, amén de la prevista coordinación de las fuerzas revolucionarias en torno a una estrategia con-



tinental, han convencido al Pentágono de que una fuerza militar interamericana podría ser inoperante tácticamente: para el imperio y sus ahijados de las oligarquías nativas no se trata ahora de ocupar militarmente un país donde —como en la República Dominicana— se asiste al enfrentamiento abierto, en términos militares convencionales, de dos facciones en pugna. La lucha guerrillera plantea a las fuerzas represivas nuevas necesidades tácticas: si en Bolivia por ejemplo, el ejército nacional resultó incapaz —hasta la creación de los cuerpos de *rangers* entrenados por EE.UU.— de llevar adelante una acción eficaz contra la guerrilla, no menos ineficiente habría sido una fuerza de heterogénea composición, bien equipada y adiestrada pero desconocedora de la región, de la idiosincrasia nativa, inhibida quizá por la diferencia de nacionalidades, de disciplinas, de intereses. Así, mientras el Departamento de Estado procuraba orquestar la fanfarria de la OEA en un intento —que ya podía anticiparse fallido— de maniatar a Cuba, al Pentágono confiaba a los ejércitos de Brasil y Argentina, al parecer reconciliados por Paraguay, la tarea de contener la «subversión interna» en el continente.

Esta línea táctica, larga y detalladamente prevista por el documento

secreto de la *Sorbonne*, se había venido dibujando soterradamente, hasta que los viajes de Lira Tavares la pusieron al descubierto. Tras sus visitas a Asunción y Buenos Aires, el ministro de guerra brasileño cumplió una misión de adiestramiento, que incluyó a los cuadros intermedios, en el seno del Tercer Ejército, con asiento en Porto Alegre (jurisdicción que comprende la zona fronteriza con Uruguay). Los puntos centrales de ese adiestramiento para una acción coordinada con otros ejércitos del continente versaron sobre:

- a/ canje de informaciones de ejército a ejército sobre cualquier manifestación señalada como subversiva en el continente;
- b/ evitar fugas de guerrilleros de un país a otro;
- c/ en el momento que correspondiera, colaborar materialmente, sea con tropas, sea con apoyo logístico, al éxito de cualquier acción antisubversiva en América del Sur.

Estos objetivos vienen cumpliéndose con relativa puntilliosidad, a través de operativos que comienzan a funcionar en ámbitos regionales como caso previo a la coordinación represiva continental. Los hechos más significativos registrados en la esfera político-militar durante los últimos seis meses vienen a ilustrar

adecuadamente sobre ese proceso (incluyendo los obstáculos con que tropieza), al tiempo que revelan la viga maestra que el Pentágono utiliza procurando sostener su estrategia para América Latina. Una breve relación de esos hechos debería incluir:

La «guerrita» entre Argentina y Brasil en campo boliviano ha quedado en tablas, porque los soldados no pelean en presencia del capitán. El régimen de Onganía contribuyó al aparato «antisubversivo» con algunos «asesores», en materia mayormente gendarmeril; Costa e Silva, por su parte, se hizo presente con cargamentos de napalm y parque aéreo. Ambos se dedicaron, ciertamente, a vigilar sus respectivas fronteras con el país «infectado» (necesidad que, para el caso de Brasil, aparece ya explícitamente contemplada en el memorándum de la *Sorbonne*, particularmente en lo que se refiere a la zona Codumbá-Cáceres); pero el Pentágono juzgó la tarea central demasiado compleja como para dejarla en manos de subordinados, sobre todo previendo que esos subordinados se inclinarían singularmente a disminuir sus diferencias laterales en el seno de un ejército ya bastante frustrado por su propia incapacidad. La primera tarea del alto mando imperial fue así conminar a la oficialidad boliviana a que de-

jara en suspenso el enfrentamiento interno de facciones (que todavía en julio último hacía prever a algunos observadores la posibilidad de que Barrientos fuera derrocado por un golpe de estado de Vázquez Sempértegui con apoyo de Ovando), quitando en consecuencia posibilidad de maniobra a los personeros argentinos y brasileños que hacían su propio juego dentro de esas facciones; la tarea inmediata consistió en adiestrar y conducir directamente los cuerpos «antisubversivos», procurando al mismo tiempo aceitar y afinar el mediocre dispositivo de inteligencia del ejército boliviano, mediante una masiva inyección de «expertos» de la CIA. Con el asesinato del Che, el régimen militar de Palacio Quemado volvió por sus fueros en el concierto de las gorilocracias del cono sur. Mientras, con desfachatada incongruencia, los personeros del gobierno boliviano insistían en sostener que su presunto «triunfo» sobre las guerrillas se había logrado «*sin ayuda extranjera de clase alguna*». La intercoordinación de los ejércitos sureños continuaba procesándose. Vale la pena ubicar estas verónicas conciliadoras en que juegan su papel los socios menores de la internacional gorila dentro de un contexto que las clarifica ajustadamente: con la momentánea interrupción de las actividades gue-

rrilleras en Bolivia, las pugnas internas del gobierno del altiplano tendían a resurgir; paralelamente, Stroessner necesitaba aplicar su atención con exclusividad al ámbito paraguayo, en el que jugaría la farsa política de su «relección», ahora consumada; también en Argentina y Brasil los militares afrontaban ásperas pugnas entre contrapuestas ambiciones personales; y en todos los campos del área gorila, las superficiales diferencias que a veces asoman entre las políticas del Pentágono y del Departamento de Estado aparecían más significativas de lo que en realidad son. Paso a paso, se iría viendo hasta dónde la política impuesta por el imperio a sus satélites del sur, en la medida que supedita toda acción política, económica o social a las necesidades de la acción represiva (como puede advertirse claramente en el memorándum de la ESG), contempla prioritariamente los lineamientos del Pentágono. En ese sentido es ilustrativo observar las crecientes dificultades internas con que tropiezan los «presidentes» de regímenes militares que deben su puesto a los afanes «institucionalizadores» del State Department pero que no poseen un control personal sobre las fuerzas armadas sino, por el contrario, dependen del poder real manejado por los institutos castrenses: en

grados diversos, tanto Barrientos como Costa e Silva parecen encontrarse en este caso.

La «operación Uruguay», cumplida a mediados de diciembre, tras la muerte del presidente Gestido, vino a poner más en evidencia este aspecto de la situación del continente, aun delatando algunas de sus singularidades. Apenas siete días después de asumir la presidencia, Pacheco Areco entró por la senda de la gorilización decretando la disolución de seis organizaciones políticas de izquierda y la clausura de dos periódicos. Esa medida fue adoptada bajo presión directa de los gorilas vecinos, representados para el caso por Alfredo Ovando, que suspendió sus «vacaciones» en Río de Janeiro para asistir al sepelio de Gestido, permaneciendo luego varios días en Montevideo. Las exequias del presidente uruguayo contaron también con la presencia del propio Juan Carlos Onganía y del Ministro del Interior brasileño, Albuquerque Lima, pero era Ovando quien fungía como mensajero del Pentágono y de sus ahijados sudamericanos: el «veraneo» en Brasil ofició obviamente como pantalla para su contacto con los jerarcas de la *Sorbonne*, contacto que ahora se extendía a los más identificados oficiales gorilas del ejército oriental. Precisamente unas semanas antes, con el pretexto

de la muerte de Guevara y de las expresiones de dolor popular que ella promovió, sectores ultramontanos de la jerarquía militar uruguaya habían recurrido al expediente de auspiciar un homenaje a «*los soldados latinoamericanos muertos en lucha contra las guerrillas*» como forma de agitar políticamente a la derecha castrense; a principios de enero, esa iniciativa resultó frustrada por la actitud mayoritariamente civilista de la oficialidad media, pero el fracaso gorila no era sino un síntoma de la singularidad del ejército uruguayo, que el Pentágono no ha perdido de vista por cierto. En rigor, las fuerzas armadas no tienen entidad real como factor de poder en el Uruguay: la exigüidad geográfica del país, su conformación topográfica, su propio surgimiento como «estado tapón» al abrigo del imperio británico y como peón en el juego geopolítico de aquél y de los subimperios vecinos (ejemplificado transparentemente en la Guerra de la Triple Alianza que destruyó la naciente potencia paraguaya), han determinado, entre otras razones, su carencia de tropa y, consecuentemente, la renuencia de los mandos a embarcarse en golpes de fuerza. El folklore político ha recogido la leyenda del golpe de estado de 1933 como síntoma extremo: el *putsch* fue capitaneado entonces

por Gabriel Terra desde la presidencia del Ejecutivo, y contó para el caso con... el cuartel de bomberos y la policía. En este contexto, la estrategia norteamericana no cuenta mayormente con el ejército para imponer decisiones en el nivel político: le alcanza, hoy por hoy, con un Ejecutivo fortalecido por la reciente reforma constitucional y un presidente dócil y de buen oído como Pacheco Areco. La labor represiva queda en manos de las fuerzas policiales, debidamente asesoradas por el FBI y la CIA; esta fórmula, por otra parte, coincide plenamente con la primera etapa de la acción «antisubversiva», que también en Argentina y Brasil se apoya en el aparato policial y que en el Pacífico se orienta rápidamente en tal sentido (como lo ha probado recientemente el viaje del máximo jerarca policial peruano a Bolivia y Chile). Las aventuras intervencionistas que sugiere el documento secreto de la ESG quedan así en suspenso: mientras la acción popular no crezca, y aunque pueda resultar hiriente para la mística castrense, al Pentágono le resulta más conveniente que los mariscales de la *Sorbonne* se entiendan con un comisario uruguayo antes que arriesgarse en una redición de la Provincia cisplatina.

Entre tanto, el ejército argentino asiste a una querrela intestina a

cuyas instancias el Pentágono no puede mostrarse insensible. La línea pronorteamericana encarnada en un sector de los participantes del cuartelazo del 28 de junio (sector cuyas cabezas visibles, en el nivel diplomático y en el militar, son los tristemente célebres hermanos Alvaro y Julio Alsogaray) tropieza, en el camino de sus intereses, con la inocultable preferencia que tanto el Pentágono como el State Department demuestran hacia sus colegas brasileños; al mismo tiempo el despecho originado por esa manifiesta preferencia ha llevado a otros sectores, representantes de un sedicente «nacionalismo», hacia una política tradicional en las relaciones de algunos ejércitos latinoamericanos con sus padrinos de Washington: el chantaje. Así debe interpretarse la «misión Uriburu», que recorrió varios países de Europa occidental y oriental, cerrando convenios para la adquisición de armamentos, entre los cuales el más importante contempla la compra de tanques franceses AXM-13, parte de cuya fabricación y montaje final se realizarían en Argentina; el régimen de Onganía ha cerrado trato también con una firma alemana (Siemens) para la instalación de una central nuclear, desechando los ofrecimientos de Westinghouse y General Electric en tal sentido (sobre este punto editorializó que-

josamente el *New York Times*: «Argentina ha dado otro gran paso en dirección a la órbita económica europea al conceder un contrato para la construcción de la primera planta atómica latinoamericana. Fuertes elementos del nacionalismo argentino y el deseo de evitar ataduras con Estados Unidos han influido en la concesión»). Con referencia a los AXM-13 y a la planta atómica (pero quizá más a los primeros que a la segunda), un vocero del Departamento de Estado, citado también por el *Times*, declaró a fines de febrero último: «Es una vergüenza que haya ocurrido esto. Al fin y al cabo, en un país dirigido por el ejército, la diplomacia norteamericana depende de sus relaciones con el ejército. Los abastecimientos norteamericanos significan asesores técnicos norteamericanos y que los militares argentinos estudien en Estados Unidos, así como otros contactos importante. Ahora todo volverá a ir hacia el otro lado»; en alguna medida, esta observación podía entenderse como dirigida al propio Ejecutivo norteamericano, al que algunos sectores del SD consideran culpable de negligencia ante el creciente deterioro de las relaciones diplomáticas entre Washington y Buenos Aires: un comentarista argentino vinculado al ala «nacionalista» del ejército comentaba a

principios de marzo que «el último embajador norteamericano partió de Buenos Aires hace dos meses y el presidente Johnson no ha encontrado todavía a un buen amigo para que lo remplace». Y ese «último embajador» era Edwin Martin, cuyo indisimulado apoyo a Arturo Illia hasta la misma víspera de su caída fue motivo de las primeras fricciones entre EE.UU. y el régimen de Onganía. Pero por detrás de estas especulaciones, muchas veces exageradas por ilusos o interesados observadores, suelen correr hechos ciertos: la «presión político-histórica», el «natural conflict», continúan siendo un estorbo en la aplicación de la estrategia del Pentágono para América Latina (paradojicamente, quizá Costa e Silva deba agradecer algo a sus colegas argentinos, ya que la adjudicación del contrato a Siemens por parte de éstos puede llevar a Washington a aflojar su renuncia con respecto a la instalación de plantas nucleares en Brasil), y se reflejan no sólo en relación a los equipamientos castrenses, sino también por ejemplo en torno a las negociaciones argentino-brasileñas sobre compra-venta de trigo y acero (producción comparada: Argentina 1.288.000 toneladas métricas de acero y 6.500.000 de trigo; Brasil 3.534.000 de acero y 500.000 de trigo), que rozan in-

cluso los intereses norteamericanos, en cuanto a la Ley 480 de excedentes agrícolas por ejemplo.<sup>3</sup> Es tal vez precisamente en el plano de la economía donde la oposición entre los dos países preocupa más manifiestamente a Estados Unidos; la revista *Visión*, que se ocupa habitualmente de traducir al castellano las opiniones de Washington, reclamaba en noviembre último con tono imperioso: «Con todos sus altibajos, el entendimiento argentino-brasileño tiene que producirse en el campo económico. Sin la comprensión recíproca y la coordinación de sus intereses, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio no funciona y el Mercado Común Latinoamericano se convierte

---

<sup>3</sup> Un curioso caso de competencias entre Estados Unidos y su «satélite privilegiado», se dio en el campo de la siderúrgica con relación al mercado argentino: según reveló *Confirmado* en febrero último, aunque sin relacionar ambos hechos más que superficialmente, tanto el *impasse* producido en las negociaciones comerciales argentino-brasileñas como el fracaso del convenio de asociación entre Acindar y la United States Steel Corporation se debían a la producción y colocación en Argentina de *Palanquilla* (acero semielaborado), extranjeros. Aunque (al igual que la batalla entre Brasil y Estados Unidos en torno al café soluble) todo podría reducirse a una guerra entre los mismos trusts internacionales con sede en el imperio, es inocultable que hechos como éstos contribuyen a exacerbar el nacionalismo latente en algunos sectores de los regímenes militares latinoamericanos y, consecuentemente, a enturbiar sus relaciones con Washington.

en una utopía».<sup>4</sup> Haciendo gala de mayor pragmatismo, empero, el Pentágono deja a los «nacionalistas» llevar adelante sus compras en Europa o cede parcialmente a su chantaje (como en la sorprendente venta de aviones norteamericanos a la fuerza aérea argentina, cuando todavía era objeto de escándalo el caso de los AXM-13; y aquí habría que tomar en consideración un elemento más sutil y conflictivo: las diferencias y los mutuos recelos entre las tres armas de la estructura castrense; en última instancia, es consciente de lo que suelen olvidar los comentaristas deslumbrados con los meandros de la geopolítica: que, la hora de la represión, las armas de los gorilas argentinos (sean norteamericanas, francesas o afganistanas) no apuntarán ciertamente al pecho de la oligarquía nativa ni al de los inversionistas norteamericanos que continúan, con prisa y sin pausa, su penetración en la industria del cono sur.

¿Cómo influyen estos hechos en el esquema estratégico trazado por el

memorándum de la *Sorbonne*? Lo primero que cabe anotar, justamente, es que todos ellos —con mayor o menor detallismo— han sido contemplados por el memorándum. Y las previsiones en el plano ejecutivo de los mariscales de la ESG se han venido cumpliendo matemáticamente bajo el reinado del «liberal» Costa e Silva: baste como ejemplo la constitución de la Comisión para Problemas Estudiantiles, puesta bajo la égida del varias veces citado general Meira Matos. Pero, sobre todo, la «*Orientación General del Planeamiento de la Seguridad Nacional*» ha encontrado impar culminación en el decreto (aprobado por el Congreso bajo el número 348) que otorga poderes especiales al Consejo de Seguridad Nacional (CSN); es precisamente en ese siniestro malabarismo, que supone la aprobación por el Congreso de un aparato que pone crudamente en evidencia la esencia dictatorial del régimen, donde los confiados publicistas de la «redemocratización brasileña» pueden encontrar la verdadera diferencia entre Costa e Silva y Castelo Branco. Un órgano tan poco sospechoso como *O Estado de Sao Paulo* ha definido los cometidos del CSN en estos términos: «*No hay ninguna esfera que escape al ámbito de competencia del Consejo, desde la política exterior al planeamiento*

<sup>4</sup> Pensando con sus deseos, *Visión* recuerda significativamente la frase pronunciada por el estadista argentino Julio A. Roca durante una visita a San Pablo a principios de siglo: «*Todo nos une; nada nos separa*». Obviamente, si ya entonces era una hipocresía, hoy la frase carece de todo valor, en buena medida debido a los manejos con que Washington ha procurado aprovechar el natural conflicto.

económico, pasando por la *investigación tecnológica y por la política sindical*; según el mismo diario, cabrá al secretario general del CSN, Jaime Portela, designar a los responsables de todas las divisiones de seguridad e información de los ministerios civiles: «*verdaderos comisarios políticos colocados por el Consejo, esos elementos serán obligatoriamente oficiales de las fuerzas armadas o civiles diplomados por la Escuela Superior de Guerras*». No en vano el CSN ha sido calificado por la prensa como «*superministerio*» o «*el Pentágono brasileño*». Vale la pena transcribir textualmente el artículo 8 de sus estatutos para advertir hasta dónde reitera puntualmente las previsiones que el memorándum secreto de la *Sorbonne* trazara dieciocho meses atrás y que serían públicamente reveladas ya a mediados de 1967:

«Al Consejo de Seguridad Nacional compete:

1/ La formulación de la política de Seguridad Nacional básicamente, mediante el establecimiento del concepto estratégico nacional y de las directivas generales de planificación, incluyendo la fijación de los objetivos nacionales permanentes (ONP) y de los objetivos nacionales actuales estratégicos (ONAE), así como de las hipótesis de guerra.

2/ La conducción de la política de Seguridad Nacional, con la apreciación de los problemas que le fueran propuestos en el cuadro de la coyuntura nacional e internacional, en especial los referentes a:

- a/ Seguridad interna.
- b/ Seguridad externa.
- c/ Negociaciones y firmas de acuerdos y convenios con países y entidades extranjeras sobre límites, actividades en las zonas indispensables a la defensa del país y asistencia recíproca.
- d/ Programas de cooperación internacional.

3/ Indicar las áreas y los municipios considerados de interés para la Seguridad Nacional.

4/ El estudio de los problemas relativos a la Seguridad Nacional, con la cooperación de los órganos de información y de los encargados de preparar la movilización nacional y las operaciones militares, en lo que concierne a políticas de: transportes, mineras, siderúrgica, energía eléctrica, energía nuclear, petróleo, desarrollo industrial, desarrollo regional y de ocupación del territorio, de investigación y experimentación tecnológica; de educación sindical, de inmigración y de telecomunicaciones.



5/ En las áreas indispensables a la Seguridad Nacional, dar asentimiento previo para:

- a/ Concesión de tierras, apertura de vías de transporte e instalaciones de medios de comunicación;
  - b/ Construcción de puentes, rutas internacionales y campos de estacionamiento;
  - c/ Establecimiento o explotación de industrias que interesen a la Seguridad Nacional.
- 6/ Modificar o anular las concesiones o autorizaciones referidas en el ítem anterior».

El aparato está ya montado; sí efectivamente Costa e Silva y los integrantes de la llamada «burguesía nacional» que lo rodean intentaron resistirse al cepo, bastaron algunas reuniones de los altos mandos y un par de oportunos tironcitos de oreja por parte de los mariscales «castelistas» para que tanto el «presidente» como los «legisladores» levantaran sus tímidas objeciones. Con el CSN, no hay *linha bamba possível*. Hasta Washington puede maniobrar con Lacerda y con el Frente Amplio, porque un civil en el Palacio de la Alborada mal podría cambiar otra cosa que no fuera, si se quiere, la «imagen» internacional del régimen: el poder seguiría estando en manos de

los mariscales de la *Sorbonne* a través de los mecanismos previstos por su memorándum y puestos ya en funcionamiento.

Quien haya dedicado su atención exclusivamente a contabilizar los sucesivos fracasos de Washington por crear un aparato militar en el marco de la OEA (llámese Fuerza Interamericana Permanente o institucionalización de la Junta Interamericana de Defensa) arriesga haber perdido de vista la operación cumplida por el Pentágono simultáneamente a esas frustraciones diplomáticas, operación que por cierto tiene antigua data; ya en 1955, en la Universidad de Columbia, el líder liberal colombiano Eduardo Santos la había definido en estos términos: «Cada país está siendo ocupado por su propio ejército». En el sur del continente, es particularmente a partir de 1964 (cuartelazos en Brasil y Bolivia) que la fórmula adquiere filosa consistencia; ciertamente, ella conduce a extremos mucho más ácidos, en el nivel de una pretendida inserción de los ejércitos latinoamericanos en el «triángulo atlántico» (tal como lo explicita Reidy en el citado *Strategy For The Americas* y lo sugiere el propio memorándum de la *Sorbonne*) y, consecuentemente, de un mayor compromiso de su parte en las aventuras bélicas del imperio. En este sentido, pueden resultar

más que ilustrativos el anunciado envío de una misión de «observadores del ejército brasileño a Viet Nam, el pequeño escándalo suscitado en torno a un proyecto similar para oficiales argentinos y las declaraciones de Alfredo Stroessner durante su reciente visita a Washington. En rigor, Estados Unidos no ha podido avanzar por este camino en el plano diplomático, como lo probó la reunión presidencial de Punta del Este; que el Pentágono obtenga éxitos donde el State Department ha fracasado depende de elementos quizá imponderables. Entre ellos, y sin entrar en el terreno de la creciente rebeldía popular, corresponde contabilizar las contradicciones internas de los mismos ejércitos latinoamericanos y los sustratos nacionalistas que ellos albergan entre sus filas.

Por supuesto, Estados Unidos no subestima este hecho; un periodista francés que visitó el año pasado las instalaciones de entrenamiento «antisubversivo» que el Pentágono posee en la zona del Canal de Panamá ha dado cuenta de una anotación significativa:

*«La Escuela de las Américas, parte integrante del Southern Command, es la clave de la estrategia y política norteamericanas en América. La casi totalidad de los instructores son de la Special Forces («boinas verdes»). No son simples oficiales*

*militares. Vienen de las grandes universidades y conocen de etnología y sociología; han recibido formación política; han aprendido a ser discretos y a respetar el orgullo nacional, siempre receloso, siempre en carne viva, de los latinoamericanos». Ese nacionalismo «receloso, en carne viva» juega en varios niveles: manejado por el imperialismo —ayer británico, hoy norteamericano—, transformado en «presión política-histórica» (según el lenguaje pseudocientífico de la ESG), suele servir a fines enteramente opuestos a su esencia conceptual; entendido en función de la lucha liberadora, en cambio, oficia como antídoto primario contra los intereses imperiales. En una u otra forma, su existencia es insoslayable, y con ella tropiezan crecientemente los graduados de la Escuela de las Américas, que por cierto no han aprendido tan bien a ser «discretos» y «respetuosos» (piénsese si no en las declaraciones de Ralph Poppie Shelton, encargado de la instrucción de los rangers en Bolivia: «Matar un vietcong cuesta 400.000 dólares. Aquí sale mucho más barato») En el caso del ejército argentino, por ejemplo, si su rivalidad con Brasil, convenientemente manipulada, le impidió durante muchos años ver tras la fachada subimperial al verdadero enemigo de los intereses nacionales, esa*

identificación resulta cada vez más clara en la misma medida en que el imperio juega su suerte continental a la carta del «satélite privilegiado». Ciertamente, confiar sólo en el «nacionalismo» incubado por los institutos castrenses sería, en el mejor de los casos, ingenuo; pero contar con él en el marco de una estrategia continental antimperialista parece más que útil, imprescindible.<sup>5</sup> Al tiempo que la complementación policíaco-militar «antisubversiva» planteada por Lira Tavares se concreta en los hechos (secuestro del dirigente argentino García Elorrio en Montevideo, detención de la estudiante boliviana María Esther Selene Autelo Colin en Río de Janeiro, para no citar si-

---

<sup>5</sup> Podría citar aquí, sólo a cuenta de una necesaria profundización en el tema, la opinión de Régis Debray, quien justamente ha sido de los que más lúcida y persistentemente ha advertido sobre el riesgo que implica confiar exclusivamente en posibles (o no) levantamientos militares. Al entrevistarle en Camiri, en octubre último, pregunté a Debray si, de escribir nuevamente *¡Revolución en la Revolución!* tras haber vivido la experiencia guerrillera boliviana en su primera fase, cambiaría algo en su trabajo. «No, no cambiaría nada, pero tal vez agregaría cosas»; por ejemplo: «lo nacional quiere decir, la importancia de factores de tipo nacional, que, aunque son usados en forma retrógrada por la reacción, deben ser tenidos en cuenta». El propio Barrientos ha sido bien consciente del fenómeno al insistir —por cierto vanamente— en su profesión de que el ejército boliviano no ha recibido «ningún tipo de ayuda exterior» en su lucha contra la guerrilla.

no dos casos recientes), las rivalidades de cuño nacionalista, como la que existe —en la periferia de la órbita subimperialista— entre Palacio Quemado y La Moneda, han llegado a hacer posible por ejemplo la salida por territorio chileno de cinco guerrilleros del ELN que lucharon junto al Che; es por supuesto difícil que el caso se repita, pero notoriamente él importa como síntoma de un fenómeno que la estrategia revolucionaria no puede desconocer, en la misma medida que se cuenta entre los supuestos de la estrategia imperialista.

Quizá en este contexto pueda adquirirse significado la enigmática frase con que Juan Bosch cerró un año atrás sus declaraciones a un periodista español: «Creo que Estados Unidos necesitará utilizar ejércitos latinoamericanos para llevarlos a combatir a Asia. Esos ejércitos iniciarán la última guerra de independencia de nuestros países». De hecho, hasta la Sorbonne y el Pentágono se han dado por enterados de que esa guerra ya está en marcha.

---

<sup>6</sup> Bosch no ha tenido que ir muy lejos para encontrar ejemplos de militares comprometidos en la lucha de liberación: el caso de Francisco Caamaño, graduado en West Point y en la Escuela de las Américas, puede ser un ejemplo elocuente en el sentido anotado, aunque la propia experiencia dominicana ejemplifique también, trágicamente, la imposibilidad de batir al imperio con sus mismas armas en su mismo terreno.



*Dubonnet  
my  
dear*